

# DIARIO OFICIAL



DIRECTOR: Víctor Manuel Portillo Ruiz

TOMO N° 427

SAN SALVADOR, LUNES 27 DE ABRIL DE 2020

NUMERO 84

La Dirección de la Imprenta Nacional hace del conocimiento que toda publicación en el Diario Oficial se procesa por transcripción directa y fiel del original, por consiguiente la institución no se hace responsable por transcripciones cuyos originales lleguen en forma ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los presentó. (Arts. 21, 22 y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional).

## SUMARIO

### ORGANO EJECUTIVO

Pág.

#### MINISTERIO DE SALUD

Decreto No. 21.- Medidas Extraordinarias de Prevención y Contención para Declarar el Territorio Nacional como Zona Sujeta a Control Sanitario, a fin de Contener la Pandemia COVID-19.....

1-10

### INSTITUCIONES AUTONOMAS

#### SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Acuerdo No. 90-E-2020.- Se acuerda aprobar las Disposiciones Transitorias para Liquidaciones Parciales de las Transacciones Económicas del Mercado Mayorista en el Contexto de la Pandemia debido al COVID-19.....

11-12

### ORGANO EJECUTIVO

#### MINISTERIO DE SALUD

DECRETO EJECUTIVO No. 21

EL ÓRGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD,

CONSIDERANDO:

- I. Que el Art. 1 de la Constitución de la República contempla que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

- II. Que el Art. 65, inciso 1.º, de la Constitución de la República establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.
- III. Que de acuerdo al Art. 66 de la Constitución de la República, el Estado dará asistencia gratuita a los habitantes en general cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmisible, caso en que toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.
- IV. Que el Art. 86, inciso 1.º, de la Constitución de la República reconoce el principio de colaboración armónica entre las distintas ramas del poder, de acuerdo al cual estas colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.
- V. Que los derechos y garantías prescritos a favor de las personas poseen dimensiones individuales y colectivas, que pretenden la realización de cada sujeto en un contexto fáctico y jurídico que también garantice el goce de los derechos de sus congéneres en la sociedad salvadoreña, ante lo cual se le otorga primacía al interés público por sobre el interés particular, como lo mandata el Art. 246, inciso 2.º, parte final de la Constitución de la República.
- VI. Que la jurisprudencia constitucional relativa a la salud mandata al Estado diferentes ámbitos de protección como la adopción de medidas para su conservación, pues la salud requiere de una protección estatal tanto activa como pasiva contra los riesgos exteriores que puedan ponerla en peligro, de ahí que se deban implementar medidas que, desde el punto de vista positivo, tiendan a la prevención de cualesquiera situaciones que la lesionen o que restablezcan dicha condición y, desde el punto de vista negativo, que eviten la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo.
- VII. Que otra obligación por parte del Estado es el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su Art. 12 establece que: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental"; y entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes se encuentra "c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas".
- VIII. Que, entre otra normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mismo Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" obligan y mandatan al Estado de El Salvador a reconocer que toda persona tiene derecho a la salud, estando obligado a garantizar las condiciones necesarias para satisfacer dicho derecho a su población. Por ello, debe adoptar medidas para el cumplimiento de compromisos, obligaciones y recomendaciones, a favor de la salud de los habitantes de la República.
- IX. Que mediante Acuerdo Ministerial No. 301, de fecha 23 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 15, tomo No. 426, de esa misma fecha, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud decretó como medida preventiva para la salud pública, con base en el contexto epidemiológico internacional y ante el avance del nuevo coronavirus (COVID-19), emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, a partir de esa fecha por tiempo indefinido.
- X. Que mediante Decreto No. 1, de fecha 30 de enero de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 20, tomo No. 426, de esa misma fecha, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud decretó las directrices relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria nuevo coronavirus (COVID-19), con el objeto de proteger la salud de la población mediante la prevención oportuna o la disminución de un eventual impacto negativo en términos de morbilidad, mortalidad, alarma social e impacto económico, frente a la emergencia sanitaria por dicha enfermedad.

- XI. Que el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando los consejos del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional.
- XII. Que el 11 de marzo de 2020, la OMS, ante la grave problemática de salud antes relacionada, declaró el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia, por sus alarmantes niveles de propagación y gravedad.
- XIII. Que el Código de Salud, en sus Arts. 129 y 130, declara de interés público las acciones permanentes del Ministerio de Salud contra las enfermedades transmisibles, regulando que este tendrá a su cargo en todos sus aspectos el control de dichas enfermedades, para lo cual deben prestarle colaboración todas las instituciones públicas o privadas en lo que sea de su competencia.
- XIV. Que el mismo Código de Salud, en sus Arts. 136 y 137, prevé que las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria; así como aquellas que aún sin presentar manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia, por el tiempo y en la forma que lo determine el Ministerio, de acuerdo con los respectivos reglamentos; mientras que los objetos con los cuales hayan tenido contacto o relación las personas expresadas deberán ser sometidos a procedimientos de desinfección según fuere el caso.
- XV. Que el Art. 139 del Código de Salud regula que, en caso de epidemia o amenaza de ella, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de la Salud Pública podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho Órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que este aconseje y por el tiempo que el mismo señale, para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación.
- XVI. Que también el Código de Salud, en sus Arts. 151 y 152, prescribe que es obligatorio para todo enfermo de cualquier enfermedad transmisible someterse al tratamiento indicado y que para sus contactos es obligatorio someterse a la investigación clínica y a las acciones de las normas que el Ministerio establezca.
- XVII. Que el Art. 184 del Código de Salud faculta al Ministerio de Salud, en caso de epidemia, a dictar y desarrollar medidas de prevención y supervisar el eficiente cumplimiento de sus disposiciones.
- XVIII. Que de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, las directrices emitidas en casos de desastres y emergencias nacionales son de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del sistema.
- XIX. Que conforme a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, todo paciente que reciba un servicio de salud ambulatorio u hospitalario, para su adecuado diagnóstico y tratamiento, tiene el deber de cumplir las indicaciones y prescripciones que les brinde el personal de salud y someterse a las medidas que se le indiquen cuando su estado pueda constituir perjuicio a la salud pública.

- XX. Que mediante Decreto Legislativo No. 593, de fecha 14 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 52, tomo No. 426, de esa misma fecha, se declaró Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, a raíz de la pandemia por COVID-19, por el plazo de treinta días; el cual fue prorrogado mediante Decreto Legislativo No. 631, de fecha 16 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 77, tomo No. 427, de esa misma fecha, por el plazo de quince días.
- XXI. Que el Art. 14, inciso 1.º, de la Ley de Procedimientos Administrativos prescribe que toda persona o autoridad está en la obligación a colaborar con la Administración Pública cuando sean requeridas para ello. En consecuencia, quienes se nieguen a colaborar incurrirán en las responsabilidades civiles, penales y administrativas que correspondan.
- XXII. Que mediante resolución de las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del 26 de marzo de 2020, pronunciada en el proceso de habeas corpus. referencia 148-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reconoció que en el contexto actual constituye un hecho notorio la crisis sanitaria mundial que ha ocasionado la pandemia por COVID-19 y que El Salvador se ha visto afectado con esta pandemia, habiéndose confirmado los primeros casos positivos en el territorio nacional; añadiendo que la "población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad causada por COVID-19 y las conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de ese objetivo legítimo del gobierno pueden ser respondidas de modo enérgico, incluso con limitaciones intensas de derechos, pero solo dentro del marco de la Constitución."; obligación que ese honorable tribunal reiteró en la resolución de las diez horas con cincuenta minutos del 8 de abril de 2020, pronunciada en el proceso de amparo referencia 167-2020.
- XXIII. Que actualmente a pesar de la emergencia sanitaria declarada, las directrices relacionadas con su atención, entre ellas las actividades de vigilancia para la detección temprana de casos sospechosos, y los decretos legislativos aprobados sobre la materia, la pandemia por COVID-19 que azota al mundo entero no ha sido superada; y a pesar de los esfuerzos de prevenirla, contenerla y controlarla que han realizado tanto el Estado salvadoreño como los particulares, se encuentra en una fase de evolución epidemiológica en el país, que demanda la conciencia individual, colectiva e institucional respecto de su indiscutible gravedad, cuya interiorización puede apreciarse en las tristes y lamentables experiencias humanas que se viven en otras latitudes que han sobrepasado dicha fase, las que nadie desea para la sociedad salvadoreña. Entonces se requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para proteger la salud y el bienestar de los habitantes, contener la progresión de la pandemia, así como mitigar su impacto sanitario, social y económico.

**POR TANTO,**

En uso de sus facultades,

**DECRETA** las siguientes:

**MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN PARA DECLARAR EL  
TERRITORIO NACIONAL COMO ZONA SUJETA A CONTROL SANITARIO, A FIN DE  
CONTENER LA PANDEMIA COVID-19**

**Objeto.**

Art. 1.- El presente decreto tiene por objeto declarar todo el territorio nacional como zona epidémica sujeta a control sanitario para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19. Por lo cual se adoptan las medidas extraordinarias siguientes:

- a) Toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliario obligatorio y solo podrá salir de su vivienda o residencia, en los casos autorizados por este decreto.

- b) Toda persona que incumpla el resguardo domiciliario sin justificación y que, luego de haber sido evaluada por el personal médico, se catalogue como caso sospechoso deberá guardar cuarentena controlada por treinta días, en tanto no se confirme o descarte la presencia de COVID-19, a través de la prueba PCR respectiva, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal respectiva.
- c) En caso de que la persona infractora condujere un vehículo automotor, este deberá remitirse para someterlo a un procedimiento de desinfección y quedará en depósito en los lugares determinados por el Viceministerio de Transporte, para evitar que el mismo se convierta en obstáculo a la vía pública debido a la intención del conductor que infringió el resguardo domiciliario obligatorio y de acuerdo a lo previsto en el Art. 118 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El vehículo será entregado al propietario o su representante, una vez cancelado el pago que corresponda al tiempo que estuviere depositado.
- d) Toda persona, cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, a partir de los cordones sanitarios visiblemente fijados.
- e) Toda persona está obligada a permitir el ingreso de los delegados del Ministerio de Salud, debidamente identificados, para inspeccionar el interior de casas, locales, predios públicos o privados, para la evaluación de medidas sanitarias a adoptar para el combate de la pandemia por COVID-19.
- f) Toda persona que haya estado presente o provenga de un país extranjero, durante el período de treinta días anteriores a su arribo a El Salvador, representa un peligro para la salud pública. Por lo que la Dirección General de Migración y Extranjería deberá observar lo previsto en la ley para negar su ingreso al territorio nacional; salvo que se trate de salvadoreños por nacimiento o naturalización, residentes, miembros de misión diplomática y de oficina consular acreditados en el país, así como miembros de sus familias, quienes serán evaluados por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional (OSI) para determinar las medidas sanitarias a las que deberán someterse, de acuerdo con los respectivos protocolos.

En todo caso, la OSI actuará de acuerdo a los protocolos establecidos y podrá fijar medidas de control y actividades de saneamiento ambiental complementarias a las sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, según lo determine el Ministerio de Salud, en aras de mitigar en mayor medida el riesgo que representa el COVID-19 para la salud de la población. En todo caso, las medidas y actividades que la OSI fije e implemente deberán cumplirse de manera rigurosa por sus destinatarios.

- g) Todas las personas que estén autorizadas para circular en el territorio nacional deberán portar obligatoriamente mascarilla.

#### **Personas que pueden circular.**

Art. 2.- Se exceptúan de la aplicación del presente decreto a las personas siguientes:

- a) Aquellas personas cuya necesidad sea la adquisición de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, tratamientos médicos y otros que por emergencia deban acudir a un centro asistencial, mercados o supermercados para abastecimientos de alimentos y artículos de primera necesidad. En este caso solo podrá realizar dicha labor una persona por familia, quien estará autorizada para realizar compras generales e indispensables, dos veces por semana. Para esto, las autoridades competentes establecerán los mecanismos necesarios de verificación, tales como el llenado de formularios. Y cuando la persona realice más de tres salidas sin la justificación de los supuestos que establece el presente decreto, deberá ser llevado a cuarentena a fin de minimizar los riesgos de contagio.
- b) Personas que se desplacen al lugar de trabajo o a efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, en los casos permitidos por la presente norma; los que se detallan adelante en los términos estrictamente permitidos por los decretos emitidos por el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud, relacionados con medidas de contención en los ámbitos de la actividad comercial y alimentaria; del sector de transporte público; la actividad alimenticia de restaurantes y otros similares; la distribución de agua a través de pipas; así como la actividad industrial y demás aplicables, relacionados con la atención de la emergencia nacional por la pandemia por COVID-19; así como los servidores de las instituciones de la Administración Pública que continúen prestando sus servicios en atención a dicha emergencia u otras actividades públicas relevantes, debiendo portar las identificaciones institucionales pertinentes.

- c) Personas cuyo objeto sea la asistencia y cuidado a niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, por enfermedades crónicas que deban desplazarse a un lugar por emergencia o atención médica periódica, inclusive si estas personas tuvieran que desplazarse a un centro hospitalario o clínica.
- d) Personas que tengan como actividad indispensable, desplazarse a entidades financieras y de seguros.
- e) Empleados debidamente identificados de las distintas dependencias de salud, farmacias, personal médico, enfermeras que tengan como labor el cuidado personal de adultos mayores o personas con algún padecimiento; personal médico y paramédico, de enfermería, personal de hospitales, laboratorios y clínicas privadas, y empleados cuya labor ha sido autorizada a las empresas en este decreto.
- f) Personas que por causa de fuerza mayor o caso fortuito o situación de necesidad extrema comprobada deban acudir a lugares específicos a solventar dichas causas.
- g) Empleados públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la Pandemia como: todas las dependencias del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Obras Públicas y Transporte; Ministerio de Agricultura y Ganadería; Presidencia de la República, Ministerio Público, Fondo Solidario para la Salud, Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Registro Nacional de Personas Naturales, Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres; Banco Central de Reserva, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, Empresa Transmisora de El Salvador, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, Autoridad de Aviación Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, Dirección General de Migración y Extranjería, Cuerpos de Socorro y Comandos de Salvamento, Dirección General de Aduanas, Correos de El Salvador, Superintendencia de Competencia, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Defensoría del Consumidor, Corte de Cuentas de la República, los municipios en relación con los servicios públicos que prestan, Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador, Zoológico Nacional en relación al mantenimiento y cuidado de los animales, ambulancias de servicios de emergencia médica, pública y privada; Dirección Nacional de Medicamentos, Dirección General de Centros Penales; funcionarios y empleados públicos autorizados por cada titular de las instituciones que presten servicios públicos o servicios sociales, relacionados directa y estrictamente al combate de la pandemia.
- h) Miembros de los Concejos Municipales, miembros de Protección Civil, Miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, quienes colaborarán con la Policía Nacional Civil, los empleados administrativos de dicho municipio que sean estrictamente necesarios; así como, los cementerios municipales y mercados municipales, estos últimos serán limitados a la venta de productos de canasta básica, utensilios de limpieza y productos farmacéuticos, los demás puestos de venta deberán estar cerrados.
- i) Magistrados, jueces y empleados de tribunales que, conforme a la Constitución y la Ley de Emergencia Nacional, no pueden diferirse sus actividades constitucionales; empleados administrativos de la Corte Suprema de Justicia y del Instituto de Medicina Legal, debidamente acreditados, que sean requeridos sus servicios en apoyo a las referidas actividades judiciales, en el marco de esta emergencia.
- j) Personas que prestan servicios de distribución de alimentos y productos de primera necesidad a domicilio.
- k) El personal que labora para los medios de comunicación y prensa, en todos sus ámbitos de actuación, quienes para efectos de acreditar su calidad deberán portar únicamente su respectivo carné, en aras de garantizar el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada, así como el pleno ejercicio del derecho a la información y libre expresión.

- l) Diputados y empleados administrativos de la Asamblea Legislativa, de los cuales sea necesario el cumplimiento de sus funciones en el marco de esta emergencia. Magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral, que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- m) Personas que laboran en vehículos de carga de transporte de mercadería y distribución de mercaderías, que sean parte de la cadena de suministro alimentaria y de primera necesidad sus respectivos productos o cuya actividad sea la importación o exportación de mercadería.

Todos los trabajadores del sector privado, de cuyas empresas estén autorizadas para realizar labores, deberán portar el carné de identificación de su empresa, más una carta de su empleador, autorizando su movilidad desde su lugar de habitación hasta el sitio trabajo.

Las personas a las que se refiere el literal c del presente artículo, deberán portar una carta de autorización de su empleador debidamente identificado con nombre, firma, número de DUI, dirección y teléfono de contacto del empleador.

En todo caso, en los desplazamientos deberán respetarse las recomendaciones y medidas dictadas por las autoridades de Salud, Protección Civil y Seguridad Pública.

#### **Servicios de Call Center.**

Art. 3.- Únicamente podrán funcionar los Call Center de atención de medicamentos, alimentos a domicilio, atención a líneas aéreas, intermediarios de seguros, servicios de electricidad, telecomunicaciones, servicios bancarios, financieros y servicios médicos, guardando además todas las medidas de distanciamiento, lavado de manos, colocación de alcohol gel y entrega de mascarillas.

#### **Capacidad de funcionamiento de industrias.**

Art. 4.- Podrán funcionar únicamente las siguientes industrias y servicios:

- a) Industria de elaboración de alimentos y bebidas y su cadena de distribución; exceptuando aquellos alimentos de productos considerados como boquitas, snacks, golosinas y similares.
- b) Industria del agua y su distribución a través de pipas, botellas o garrafones.
- c) Industria de productos de limpieza e higiene de superficies y productos de higiene personal.
- d) Industria farmacéutica y su cadena de distribución.
- e) Industria de bolsas plásticas, empaques de plástico, papel y cartón, de envases y etiquetas.
- f) El sector agropecuario, agroindustria, ganadería, apicultura y pesca y su cadena de distribución.
- g) Industria de insumos para la agricultura.
- h) Industrias de hilanderías relacionadas a la elaboración de tela que es necesaria para sábanas, gabachas, mascarillas, gorros y otros implementos demandados en hospitales y red de salud.
- i) Industria de panadería, en lo fundamental y básico para la familia.

Queda autorizada toda industria de confección de ropa exclusivamente relacionada a la elaboración de gabachas y ropa vinculadas al combate de la pandemia y personal de salud.

La industria cosmética solo podrá operar si se transforma en industria de medicamentos.

Podrán operar las empresas exportadoras, en las áreas de despacho de productos y áreas administrativas, relacionadas al cumplimiento de contratos de exportación; asimismo, las áreas administrativas de empresas que realizan procesos de inversión y requieren realizar trámites públicos y privados, en ambos casos, previa autorización del Ministerio de Salud y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador.

#### **Circulación de vehículos.**

Art. 5.- Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el artículo anterior o para el abastecimiento en gasolineras o estaciones de servicio, so pena de incurrir en responsabilidad, de no realizarse por los motivos citados y con las condiciones expresadas.

#### **Servicios a instituciones públicas.**

Art. 6.- Los talleres automotrices previa autorización del Ministerio de Salud, que den servicio por demanda y en exclusiva a compañías de seguros, patrullas y vehículos de las entidades mencionadas en el artículo 2 literal g de este decreto, empresas de telecomunicaciones, empresas de electricidad, transporte público y de carga. Todos estos servicios quedan autorizados, siempre y cuando sean requeridos por dichas instituciones, estando únicamente dedicados a tal servicio y a ninguna otra solicitud.

Las ferreterías podrán operar con el 30% de su capacidad instalada y atendiendo las demandas única y exclusivamente del Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Policía Nacional Civil, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Fondo Solidario para la Salud, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Dirección Nacional de Medicamentos, empresas de telecomunicaciones, empresas de electricidad, transporte público y de carga, que serán casos que se encuentren relacionados estrictamente con reparaciones o construcción de instalaciones dedicadas a la atención de la pandemia por COVID-19.

#### **Servicios financieros.**

Art. 7.- Los servicios financieros como banca y cajas de crédito, financieras, sociedades de ahorro y préstamo, servicios de seguros, servicios de titularización, cajas de mercado bursátil, casas de bolsa, bolsa de productos y las empresas que manejan fondos de pensiones deberán trabajar al 50% de su capacidad instalada. Se exceptúan única y exclusivamente las agencias de las entidades bancarias destinadas a la entrega del subsidio de los \$300 dólares, que podrán operar al 100% de su capacidad mientras dure el período de entrega. Dichas instituciones deberán guardar todas las medidas de distanciamiento social, colocación de alcohol gel, mascarillas, aislamiento inmediato ante síntomas sospechoso de un trabajador o cliente y otras medidas que eviten el contagio masivo de personas.

#### **Cumplimiento de normas.**

Art. 8.- Los bancos, clínicas, farmacias, supermercados, mercados y establecimientos, que este decreto permite seguir funcionando, deben cumplir las normas de higiene y aplicar las medidas de protección eficaces para los empleados y los visitantes, lo cual implica entre otras cosas: alcohol gel a la vista para uso de los que llegan, garantizar el distanciamiento entre las personas, obligación de limpiar las manos una vez se tenga contacto con billetes, tanto para cajeras como para clientes, uso de mascarillas, aislar a quienes tosen o estornudan constantemente y, de ser necesario, llamar al 132 por si es requerida atención o traslado de alguna persona con síntomas sospechosos.

En el caso de entierros de personas que no hayan fallecido por la enfermedad COVID-19, los grupos dolientes no podrán exceder de quince personas y, tanto en la vela como en el sepelio, deberán guardarse las medidas de distanciamiento, además de las medidas preventivas ya señaladas en este decreto. La presente autorización no aplica para personas que hubieren fallecido por COVID-19, en este caso se ejecutará lo dispuesto en los protocolos establecidos para tal efecto.



**Obligación de identificación.**

Art. 9.- Al asistir a las actividades en este decreto permitidas, así como las personas que trabajan en la asistencia de cuidado de niños o adultos mayores, personas con discapacidad o personas con enfermedades crónicas, personal indispensable para el procesamiento de pago de planillas de todas las empresas suspendidas y con autorización de funcionamiento, contadores públicos y personal administrativo, que deba hacer los trámites para realizar las obligaciones tributarias de las empresas a las que dan servicio, deberán portar su carné e identificación y una carta cuyo contenido será: la actividad y nombre de la empresa, datos generales del trabajador y sus funciones, cargo dentro de la empresa, horarios de entrada y salida del trabajador y dirección y contacto del empleador. Dicha carta será conferida por el empleador o el jefe de recursos humanos de su empresa, a fin de comprobar la actividad que se encamina a realizar.

Se podrá acudir a la atención de emergencia médica, las compras de abastecimiento familiar o personal, las visitas al médico por citas médicas, incluyendo emergencias odontológicas y sus consecuentes exámenes necesarios, así como las emergencias veterinarias u otras actividades necesarias de gestión económica siguen siendo autorizadas; no obstante, deberán seguirse los protocolos sanitarios tales como: guardar distancia entre las personas que se encuentren en el mismo espacio, taparse la boca al estornudar o toser, evitar tocarse la cara, lavarse las manos constantemente y utilizar mascarillas. Para realizar estas actividades y evitar inconvenientes, se deberá portar los documentos probatorios de la gestión a realizar.

**Facultades del Ministerio de Trabajo.**

Art. 10.- El Ministerio de Trabajo y Previsión Social establecerá los protocolos de seguridad y salud ocupacional aplicables para las empresas que puedan continuar con el ejercicio de sus actividades, de conformidad a lo establecido en este artículo. Lo dispuesto en el presente artículo tendrá aplicación en todas las instituciones públicas, inclusive las municipalidades, para efectos de salvaguardar la salud e integridad de los trabajadores, debiendo adaptarse los protocolos a que se refiere el presente inciso, a los que establezcan, dentro del marco de su respectiva competencia, el Ministerio de Salud y los titulares de las instituciones públicas citadas.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de las Direcciones Generales de Inspección de Trabajo y de Previsión Social, verificará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, en los lugares de trabajo que corresponda.

**Otros servicios autorizados.**

Art. 11.- Los servicios de seguridad, generadoras eléctricas, gasolineras, transporte de pasajeros a la mitad de su capacidad operativa, transporte privado, servicios de taxi, transporte de carga de los rubros autorizados o los que ingresan por intercambio comercial en aduanas, están permitidos, con la limitación de que no puede ir más de un pasajero y, solo en casos excepcionales de acompañamiento de personas adultas a sus consultas y (o) tratamiento médico, llevar a horas muy tempranas o recoger a altas horas a un familiar de su centro de trabajo o casos debidamente justificados, podrá ser más de un pasajero.

Se encuentran autorizados los servicios de distribución de gas propano, agua potable, pública y privada, así como su construcción y mantenimiento, servicios postales, correos y encomiendas, y servicios funerarios.

Los servicios de apoyo a la aviación, tales como despachadores, apoyo terrestre, carga y descarga de aeronaves, tripulaciones, mantenimiento de todo tipo de equipo utilizado en aeropuertos, mantenimiento aeronáutico y similares, también tienen autorización.

**Colaboración municipal.**

Art. 12.- Los Alcaldes, Concejos Municipales, Cuerpos de Agentes Municipales y los miembros de comisiones de Protección Civil Municipales deberán colaborar con la Policía Nacional Civil, controlando los mercados, en cuyo interior solo puede haber venta de comida, bebida, granos básicos y materiales de limpieza. Además, vigilarán porque se dé el debido y estricto cumplimiento a las medidas establecidas por este decreto, en las comunidades pertenecientes a sus territorios. El resto de los empleados municipales deberán guardar cuarentena, debiendo asistir a sus labores, únicamente, la planilla mínima necesaria para la realización de pagos o de aplicación de las medidas antes enunciadas.

**Trabajadores prioritarios y medidas de aislamiento para su seguridad.**

Art. 13.- Las industrias y actividades relacionadas en los artículos anteriores, deberán enviar a sus casas a los empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, como insuficiencia renal crónica o trasplantados, cáncer en proceso de radioterapias o quimioterapias, VIH con carga viral detectable, lupus, diabetes mellitus y enfermedades pulmonares crónicas.

Sin perjuicio de la Seguridad Laboral y, aún en su funcionamiento limitado, las industrias y empresas autorizadas para operar deberán acatar e implementar todas las medidas necesarias para resguardar a sus empleados de un posible contagio, tales como: distanciamiento social y, en caso de que la actividad implique cercanía, deberá proveerse de mascarillas, colocación de alcohol gel y lavado constante de manos, entre otras que, a criterio de los empleadores, se consideren oportunas.

**Colaboración y obligaciones.**

Art. 14.- Las personas deberán colaborar y acatar las restricciones antes indicadas, sin perjuicio de incurrir en las responsabilidades penales y civiles pertinentes.

Las empresas que realicen cualquier actividad de las no autorizadas por este decreto o sin la autorización respectiva, se procederá al cierre temporal de estas, conforme a las leyes respectivas.

**Otras facultades del Ministerio de Salud.**

Art. 15.- En caso de ser esencial, para los fines del presente decreto, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud podrá conceder las autorizaciones de funcionamiento de otras industrias vitales para la población, siempre y cuando las empresas no hayan hecho uso de la suspensión del contrato de trabajo, establecido en el título primero, capítulo V, del Código de Trabajo.

**Derogatorias.**

Art. 16.- Derógase el Decreto Ejecutivo en el Ramo de Salud No. 19, de fecha 13 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 74, Tomo 427, de esa misma fecha.

**Vigencia.**

Art. 17.- El presente decreto tendrá una vigencia de diecisiete días contados a partir de los dos días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL MINISTERIO DE SALUD: San Salvador, a los veintisiete días de abril de dos mil veinte.

FRANCISCO JOSÉ ALABI MONTOYA,

MINISTRO DE SALUD AD HONOREM.

# INSTITUCIONES AUTONOMAS

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, al público para los efectos de ley,

HACE SABER: Que con fecha veinticuatro de abril de dos mil veinte, la Junta de Directores de la SIGET emitió el ACUERDO N.º 90-E-2020, el cual, en su parte resolutiva, literalmente dice:

Por lo antes expuesto y con base en la documentación agregada al expediente, esta Junta de Directores, de conformidad con las normas jurídicas relacionadas, siguiendo el debido proceso y acorde al marco jurídico vigente, por mayoría, ACUERDA:

- a) Aprobar las “DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LIQUIDACIONES PARCIALES DE LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL MERCADO MAYORISTA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEBIDO AL COVID-19”, en los términos establecidos en el presente acuerdo y especialmente lo siguiente:

1. En caso de no contar con los fondos completos de la liquidación de transacciones, la UT efectuará una liquidación parcial, con base en los fondos que tenga disponibles y luego de descontar los montos correspondientes al Cargo por el Uso del Sistema de Transmisión, el Cargo por la Operación del Sistema de Transmisión y Administración del Mercado Mayorista y el monto correspondiente al monto neto adeudado al Mercado Eléctrico Regional (MER); la UT asignará los fondos restantes a cada PM acreedor en forma proporcional y de acuerdo con los montos acreedores.

Para tal efecto, la UT procederá a elaborar y remitir las instrucciones de transferencia de fondos a la institución bancaria para que desde la cuenta de la UT se realicen los pagos a los PMs con saldo acreedor. La UT comprobará que en su cuenta se haya registrado igual monto de cargos y de abonos.

2. En el marco de estas disposiciones, los PMs podrán efectuar abonos parciales de los montos correspondientes a la liquidación de transacciones, serán los PMs que suministran energía eléctrica a los usuarios finales en redes de distribución, que hayan experimentado una disminución de sus ingresos recolectados a través de la facturación a usuarios finales como resultado de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.º 601.
3. En el caso que los PMs identificados en el numeral 2 anterior, hayan efectuado un abono parcial de sus obligaciones de pago por las transacciones económicas indicadas en el DTE respectivo en la fecha indicada en el calendario de facturación y liquidación, y ese abono parcial cumpla ser proporcional a los montos colectados de los usuarios finales en redes de distribución, procederá realizar lo siguiente:
  - a. No se aplicarán las disposiciones relacionadas con los procesos sancionatorios por mora y falta de pago especificadas en el Anexo Infracciones y Conflictos; por tanto, no se declarará que ese abono parcial constituye una falta grave.
  - b. No se procederá por parte de la UT a la ejecución de las garantías de pago, por los montos correspondientes a los faltantes de pago.
  - c. No se aplicará la regla contenida en el numeral 18.10.6 del capítulo 18 del ROBCP, por lo que no se podrá inhabilitar de participar en los Mercados administrados por la UT, a los PMs autorizados para efectuar pagos parciales.
4. La UT eximirá del pago de intereses por mora a los PMs identificados en el numeral 2 que hayan efectuado pagos parciales, en consecuencia, los referidos PMs deberán presentar a la UT con copia a la SIGET, a más tardar en la fecha de la liquidación parcial, un cuadro resumen de la situación de sus flujos de ingresos, en el que se reflejen aspectos como los siguientes:
  - a. La recolección esperada de la facturación a usuarios finales de los períodos afectados,
  - b. La recolección real,
  - c. Proporciones de los montos recolectados de la facturación a los usuarios finales.
  - d. Desembolsos asociados a los financiamientos puente u otros financiamientos (en caso los hubiere),
  - e. El déficit estimado,
  - f. Cualquier otra información que se estime relevante.

El objeto de la información anterior es que los PMs que soliciten diferir parte de sus pagos en las liquidaciones de mercado pongan de manifiesto en una forma esquemática y resumida, la imposibilidad de pago del monto que cada PM reporte a la UT que no podrá ser abonado en la fecha programada para la liquidación de transacciones.

5. El resto de actividades del proceso de liquidación se desarrollará de acuerdo con lo indicado en el Anexo 14: Administración de los Procesos de Facturación y Liquidación del Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista basado en Costos de Producción.
6. Finalizada la vigencia de las Disposiciones Transitorias, la SIGET realizará una auditoría del sistema de facturación comercial referente a la colecturía de los PMs, entendiéndose por esto una auditoría de los flujos de caja asociados a los ingresos de los diversos cargos facturados por los PMs que hayan efectuado abonos parciales en las liquidaciones de transacciones, para el período que se considere relevante.

En caso de encontrarse situaciones irregulares (v. gr. que los montos que quedaron pendientes de pago en las liquidaciones parciales de un PM no fuesen consistentes con la situación de flujo de caja de sus ingresos), deberá entonces restablecerse la obligación de pagar intereses por mora por todos aquellos pagos que se hayan diferido durante la aplicación de las disposiciones transitorias, sin perjuicio de las sanciones que, según el ROBCP y la Ley General de Electricidad, sean procedentes como consecuencia de entregar a la UT y a la SIGET información falsa, incompleta o de forma distinta a la requerida.

7. La vigencia de las presentes Disposiciones Transitorias finalizará el quince de julio de dos mil veinte y podrá ser prorrogada por la Junta de Directores de la SIGET, en caso que la UT lo solicite con la debida justificación, a más tardar el treinta de junio de dos mil veinte. Para tal efecto, deberá adjuntar un informe sobre la aplicación de las Disposiciones Transitorias y sus resultados a esa fecha, en el que evalúe las perspectivas de continuar con su aplicación a corto y mediano plazo. Como resultado de su análisis deberá recomendar o no una prórroga de las mismas. Con base en la recomendación de la UT, la Junta de Directores de la SIGET valorará la pertinencia o no de extender la vigencia de estas disposiciones transitorias.

El numeral 6 de las presentes Disposiciones Transitorias prevalecerá a la vigencia establecida en el párrafo anterior, mientras duren sus efectos.

Las Disposiciones Transitorias estarán vigentes a partir de su notificación y publicación en el Diario Oficial.

- b) [...]
- c) Inscribir el presente Acuerdo en la Sección de Actos y Contratos del Registro de Electricidad y Telecomunicaciones adscrito a esta Superintendencia.
- d) Publicar el literal a) de la parte resolutive del presente acuerdo.
- e) Notificar "Ilegible" W. Jiménez "Ilegible" AJ Siliézar "Ilegible" "Ilegible" "Rubricadas".

Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser presentado en el Diario Oficial, extendiendo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte.

Manuel Ernesto Aguilar Flores,  
Superintendente.

(Registro No. F054120)